

Expansión del neoliberalismo y políticas sociales

Una lectura de la crisis desde el Barómetro Social de España

Febrero, 2013
*Colectivo Ioé*¹

El *Barómetro social de España* es una herramienta de trabajo que contiene series estadísticas de 190 indicadores y elabora 35 índices sintéticos, a lo que se añade un conjunto de informes y análisis coyunturales sobre la situación social de España. Desde octubre de 2012 la web del Barómetro incluye un apartado de “novedades” que recoge breves comentarios al hilo de la actualidad. El Barómetro se financia con aportes voluntarios de las personas y colectivos usuarios, que pueden suscribirse gratuitamente para recibir las novedades en el momento de su aparición.

www.colectivoioe.org

www.barometrosocial.es

Contenido

Presentación

1. Tendencias socioeconómicas

Coyuntura de crisis y ciclos económicos. La onda larga neoliberal
Burbuja accionarial y congelación del salario real
La riqueza y la renta de los hogares: desigualdad creciente
La recesión frena el deterioro ambiental, que vuelve a empeorar en 2011

2. Efectos sociales de la crisis

Record de desempleo
Polarización salarial y social
Endeudamiento y desahucios
Deterioro de las condiciones de vida

3. Tendencias de las políticas sociales

Peso e importancia de las políticas sociales
Evolución de las principales partidas
La política de recortes incrementa el malestar y la movilización social

¹ Equipo de investigación social integrado por Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada. Colectivo Ioé forma parte del grupo cooperativo Tangente (www.tangente.coop).

Presentación

A través de diversos indicadores, el Barómetro trata de medir los cambios de la sociedad española desde el punto de vista social, es decir, destacando si estos son positivos o negativos en términos de equidad y bienestar para la mayoría de la población. Entre otros aspectos recoge información sobre el capital y los salarios, el impacto medioambiental del modelo productivo, los ingresos del Estado y las políticas sociales, el acceso al empleo y las condiciones de trabajo, la riqueza y la renta de los hogares y, en general, las condiciones de vida de la población.

En este texto se analizan diversos indicadores relacionados con los impactos de la crisis económica y las políticas gubernamentales adoptadas para afrontarla. En el primer apartado se analizan tres dimensiones: la distribución de ingresos entre capital y salarios, la distribución de la renta y el patrimonio de la población y los efectos medioambientales del modelo económico. El segundo apartado aborda algunas de las consecuencias más graves de la crisis desde el punto de vista social: el paro, la polarización salarial, el endeudamiento/desahucios y el deterioro de las condiciones de vida. El tercer apartado recoge el peso y evolución de las políticas sociales, las medidas adoptadas por el gobierno español y las autoridades comunitarias para salir de la crisis y el creciente malestar de la población que da lugar a frecuentes movilizaciones de protesta.

1. Tendencias socioeconómicas

Coyuntura de crisis y ciclos económicos. La onda larga neoliberal

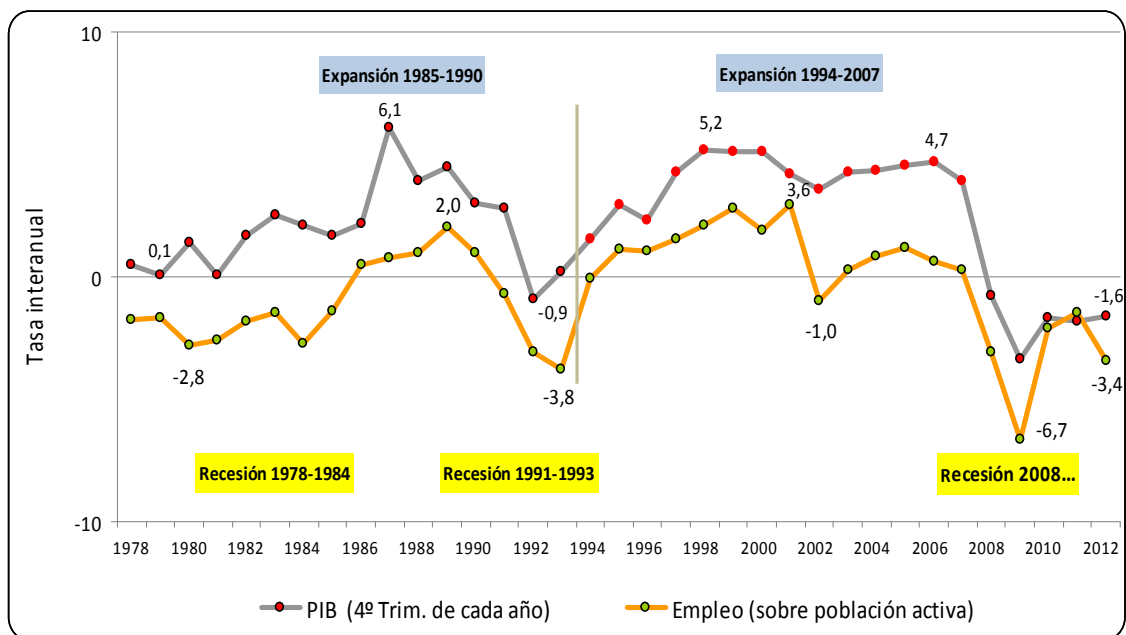
El Barómetro social de España recoge indicadores desde 1994 hasta 2011, lo que permite hacer una valoración del último ciclo expansivo (1994-2007) y de los recientes años de crisis a partir de 2008. El carácter cíclico de la economía capitalista ha dado lugar en los últimos 35 años a dos etapas de crecimiento –de 6 y 14 años, respectivamente-, intercaladas con otras tres de decrecimiento. El Gráfico 1 muestra la variación interanual del PIB y del empleo en cada uno de estos ciclos. En este texto nos centramos en la evolución socioeconómica de los dos últimos ciclos con la intención de ofrecer un panorama general de las principales tendencias desde el punto de vista social.

Nuestro análisis de los ciclos económicos se sitúa en un nivel descriptivo y de corto plazo, que es necesario enmarcar una reflexión más global y de largo plazo en torno a la acumulación de capital en España –y su contexto europeo- y los procesos de ajuste que se producen cíclicamente para recomponer los desequilibrios crecientes del sistema histórico capitalista. Diversos autores coinciden en situar un punto de inflexión importante a nivel internacional a mediados de la década de 1970, momento en que se pasó en los países centrales del capitalismo “fordista” de postguerra a las *políticas neoliberales* aplicadas con mayor o menor intensidad en las últimas décadas. La desaceleración de la productividad se salda con el estancamiento o disminución del salario real en casi todos los países², en paralelo con un incremento correlativo de la tasa de ganancia del capital. Como señalan Alfonso Ortí y Ángel de Lucas, “se pasa

² OIT, *Informe Mundial sobre Salarios 2012-2013*, Ginebra, 2012; y OCDE, “Partage de la valeur ajoutée entre travail et capital: Comment expliquer la diminution de la part du travail?”, en *Perspectives de l’emploi* (Chapitre 3), 2012.

de la etapa dorada del capitalismo, marcada por la adopción del paradigma teórico keynesiano, con sus implicaciones de reforma social y democratización política, y que acaba integrando a las masas trabajadoras –incluidas sus organizaciones de clase- en la aceptación del sistema, al modelo ideológico del *neoliberalismo conservador*, fundado principalmente en el individualismo consumista”³.

Gráfico 1
Evolución del PIB y del empleo en España en los últimos 35 años



Fuentes: *Contabilidad Nacional de España* para el PIB; y *Encuesta de Población Activa* para la tasa de empleo en relación a la población activa.

Los cinco ciclos de corto alcance reflejados en el Gráfico 1 formarían parte de una onda larga del capitalismo, caracterizada como “neoliberal”, que tendría según Michel Husson el siguiente esquema de funcionamiento: 1) la tasa de ganancia se recupera gracias a una disminución general de la participación de los salarios y a la elasticidad del empleo que reduce la masa salarial en los ciclos de crisis como consecuencia de la destrucción de empleo; 2) la disminución de ingresos salariales reduce el poder de compra de la mayoría de la población y, por tanto, las oportunidades de reinversión rentable en el sistema productivo; 3) el dinero sobrante se canaliza hacia el hiperconsumo de los rentistas, el endeudamiento de los empleados y la colocación de “capital libre” en el mercado financiero internacional, gracias a la desregulación y a la creación de sofisticados productos que conducen, a su vez, a burbujas financieras y crisis periódicas que ejercen nuevas presiones sobre los salarios⁴.

³ ORTÍ, A. y DE LUCAS, A., “En los límites del desarrollo capitalista: multifrenia consumista y crisis de civilización en el modelo de globalización financiera”, *II Seminario internacional de sociología crítica “Jesús Ibáñez”*, Universidad de Valencia, 2005.

⁴ HUSSON, M., “Capitalisme: vers une régulation chaotique”, 2009, en <http://hussonet.free.fr/imp9web.pdf>. También Cámara incluye todo el período comprendido en el Gráfico 1 como la segunda fase de una onda larga económica iniciada en los años cincuenta del siglo pasado. La fase expansiva se extendió hasta mediados de los ‘60, con crecimientos medios cercanos al 6% anual e importantes avances en la productividad del trabajo, acompañados por conquistas sociales que redujeron la tasa de ganancia del capital. La fase, contractiva, presenta crecimientos medios inferiores al 3%, una escasa inversión tecnológica en relación a los países del entorno (incorporación extensiva de mano de obra de baja

La España franquista adoptó con retraso (a partir de los '60) y con rasgos propios las políticas keynesianas de la segunda postguerra mundial, con un fuerte incremento relativo de los salarios y una notable expansión de la sociedad de consumo y la puesta en marcha de las bases de un estado de bienestar autoritario. El inicio del ciclo democrático, en el que se desarrollaron una serie de derechos sociales y económicos, coincidió con el fin del modelo de crecimiento de posguerra en los países centrales; así, durante décadas la ampliación de ciertas garantías sociales se desarrollaron simultáneamente con el desarrollo de medidas típicamente neoliberales. Más allá de impresiones subjetivas el indicador más expresivo de esta evolución en el caso de España es el reparto del excedente entre el capital y la población asalariada: entre 1977 y 2011 la parte de la tarta del capital se incrementó en 17 puntos porcentuales⁵.

Las políticas neoliberales –entre ellas la reducción del gasto público, la bajada de impuestos, la desregulación del mercado laboral y financiero, etc.- se aplicaron en toda su extensión en determinados países periféricos en los años 80-90 del siglo pasado (consenso de Washington, crisis de la deuda externa, planes de ajuste auspiciados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, etc.). En el contexto español, en cambio, su introducción fue más pausada y no lineal. Hasta el estallido de la crisis en 2007: a partir de entonces las elites dominantes parecen decididas a aplicar la receta sin matices a los países centrales.

A continuación se recoge la información disponible en el Barómetro social en relación al último período reciente del ciclo neoliberal, mostrando las diferencias y continuidades entre los años de expansión, entre 1994 y 2007, los de crisis y contracción, a partir de 2008.

Burbuja accionarial y congelación del salario real

El valor monetario de las *acciones empresariales* –tanto las cotizadas en Bolsa como las no cotizadas- creció de manera extraordinaria entre 1994 y 2007, pasando de 0,4 a 2,4 billones de euros, a precios constantes de 2011, lo que multiplicó por seis su precio de mercado (ritmo interanual medio del 15%). En otros términos, se produjo una “burbuja accionarial” que se infló a doble velocidad que la burbuja inmobiliaria (tasa interanual del 7,7% en el mismo periodo, como veremos más adelante) y superó en cuatro veces al PIB (4,2%). Uno de los factores que explican el crecimiento y revalorización de las empresas españolas fue la inversión de capital extranjero que hizo de España uno de los países con mayor deuda externa privada del mundo⁶.

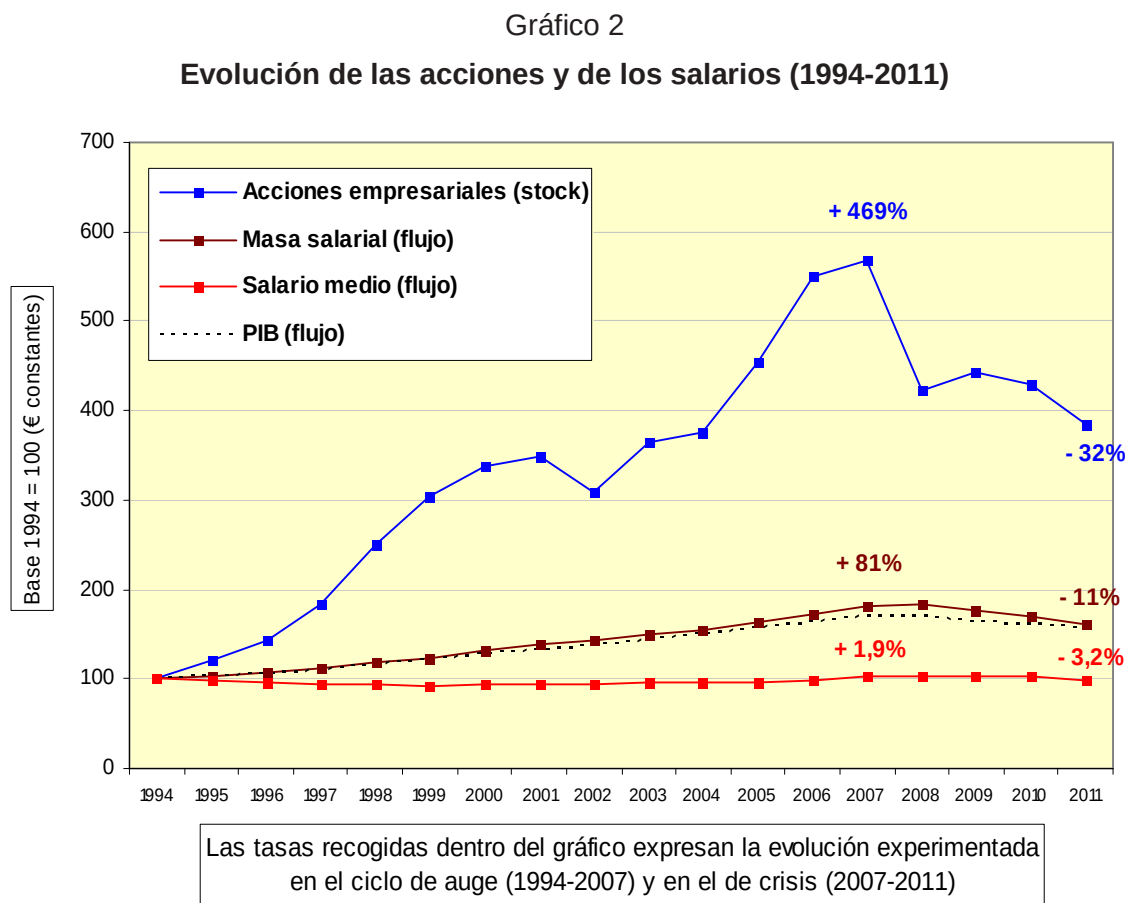
Al llegar la crisis, las acciones perdieron el 32% de su valor (800.000 millones de euros), con un descenso concentrado en su mayor parte en el primer año del ciclo (2008). Esta pérdida de valor de los activos da paso a una fuga importante del capital extranjero que busca lugares más rentables para su inversión, lo que acentúa la desvaloración de las empresas. No obstante, el ritmo interanual de las pérdidas en los cuatro años de crisis (8,6%) ha sido bastante menor que el ritmo de ganancias en los catorce años previos de crecimiento (tasa interanual del 15%). El valor del conjunto de

productividad) y un desempleo persistente. CÁMARA, S., “La onda larga capitalista en España (1954-2002)”, en *Revista Brasileña de Economía Política*, N° 18, pág. 86-111, 2006.

⁵ Ver la novedad publicada el 23 de octubre de 2012 con el título “El modelo vigente enriquece a los más ricos: 1% frente a 99%”, en www.barometrosocial.es.

⁶ Se entiende por “deuda externa” lo que pertenece o se debe a personas e instituciones no residentes en el país, ya sea en dinero, bienes o servicios (definición del Banco Mundial). Según el *Banco de Pagos Internacionales*, España fue el país “desarrollado” que más se endeudó en relación al PIB entre 2000 y 2010, pasando a ocupar el cuarto lugar como país más endeudado, después de Japón, Portugal y Bélgica.

las empresas en 2011 se situaba en el mismo nivel que en 2004, es decir, había perdido bastante menos de la mitad de lo ganado en los años anteriores (Gráfico 2).



Fuentes: Banco de España, para las acciones empresariales (cotizadas y no cotizadas); Agencia Estatal de Administración Tributaria, para los salarios; y Contabilidad Nacional de España, para el PIB. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Empleo.

En contraste con la revalorización de las acciones hasta 2007, el *salario medio* de la población trabajadora quedó casi congelado: avanzó sólo el 1,9% en el conjunto del período expansivo. Mientras tanto, la *masa salarial* (el total de retribuciones de la población asalariada) creció el 81%, algo por encima del PIB (70%), debido al extraordinario incremento de la ocupación (de 12 a 20 millones, según la EPA). Aunque el empleo temporal se situó siempre por encima del 30%, una tasa tres veces superior a la media de la Unión Europea por aquellos años.

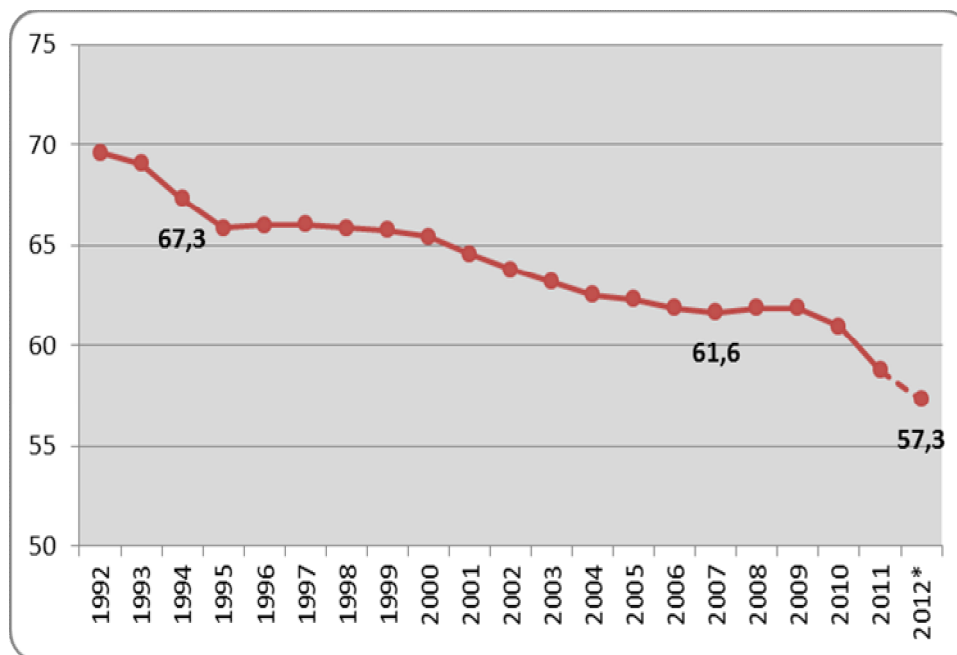
Entre 2007 y 2011 la masa salarial (medida en euros constantes) se ha reducido un 10,8%. Este descenso podría atribuirse “simplemente” a la caída del empleo; sin embargo, el salario medio se ha reducido un 3,2% (Gráfico 2). Una tendencia que parece haberse intensificado en 2012 si tenemos en cuenta que los salarios pactados⁷ han registrado la menor subida de los últimos 30 años (1,3 puntos de media) lo que supone una pérdida de 1,6 puntos de poder adquisitivo, dada la inflación del 2,9% en este último año.

⁷ En 2012 se firmaron 3.611 convenios colectivos que dieron cobertura a seis millones de personas asalariadas.

En suma, en ambos momentos del ciclo (expansión y crisis) se registra una distribución regresiva del ingreso entre clases: la parte de los salarios retrocedió 6 puntos porcentuales entre 1994 y 2007 (de 67,3% a 61,6%) y otros 4 puntos entre 2007 y 2012 (hasta 57,3%) (Gráfico 3).

Gráfico 3

Parte del excedente apropiada por los asalariados (1992-2012)



Fuente: EUROSTAT, base de datos AMECO. Cálculo al coste de los factores.

Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Renta y patrimonio.

(*) 2012 = estimación provisional.

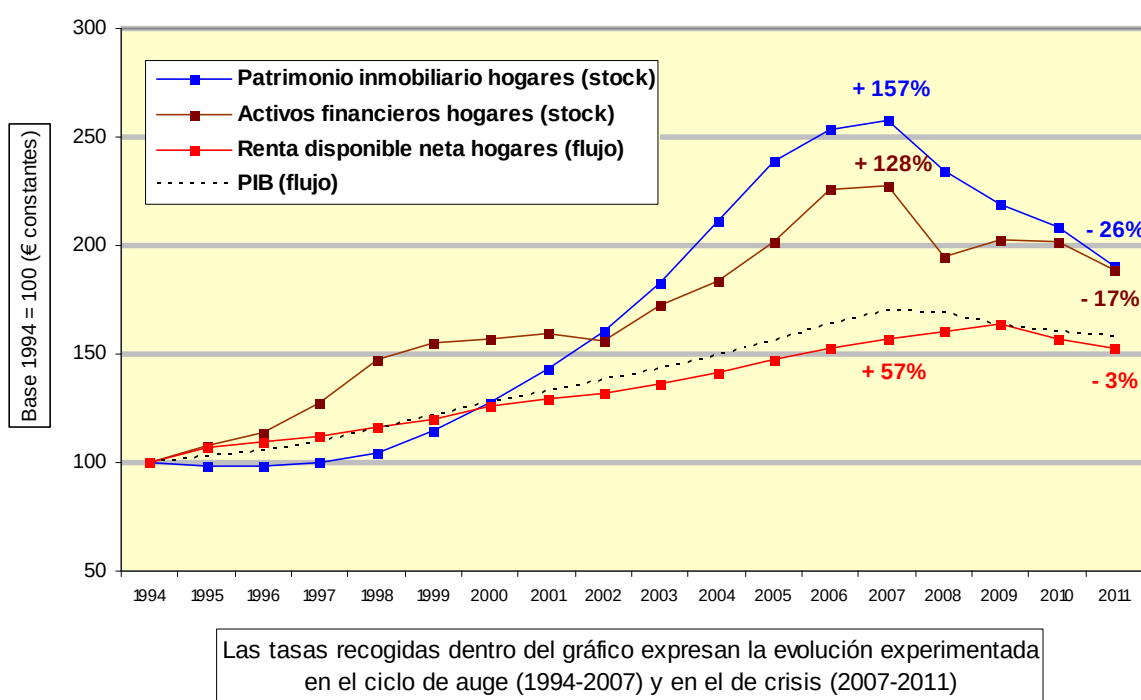
Los beneficios brutos de las empresas españolas, según datos recogidos por Eurostat, vieron reducida su participación en cinco puntos durante la etapa de desarrollismo franquista, entre 1960 y 1976, pero la ampliaron substancialmente a partir de los Pactos de la Moncloa (1977), con la creciente inserción de España en el modelo global neoliberal. La parte del excedente apropiada por el capital pasó del 26% en 1977 al 33% en 1994 y al 43% en 2012, lo que supone un incremento de 17 puntos porcentuales. Aunque en los primeros años de la actual crisis (2007-2009) el peso relativo de los beneficios disminuyó debido a la recesión, su trozo de la tarta se incrementa notablemente a partir de 2010. Por tanto, la participación de los salarios en la renta nacional descendió continuamente durante el último ciclo de crecimiento y vuelve a caer con la adopción de políticas “de ajuste” desde 2010. En suma, se está perpetuando una *tendencia estructural a la redistribución regresiva de la renta*.

La riqueza y la renta de los hogares: desigualdad creciente

En el último ciclo expansivo de la economía española (1994-2007) la *riqueza*⁸ agregada de los hogares (suma del patrimonio inmobiliario y de los activos financieros) se revalorizó de forma extraordinaria, pasando de 2,9 a 7,2 billones de euros, en moneda constante del año 2011. Esto supuso un ritmo de crecimiento anual del 7,3%, casi el doble que el PIB (4,2%) y más del doble que la *renta* disponible ingresada cada año por las familias (tasa interanual del 3,5%). Como muestra el Gráfico 4 la riqueza acumulada por los hogares aumentó un 148% (los inmuebles el 157% y los activos financieros el 128%), mientras la renta disponible ingresada cada año por esos mismos hogares se incrementó un 57%.

Gráfico 4

Evolución de la riqueza y de la renta disponible de los hogares (1994-2011)



Fuentes: Banco de España para los activos financieros de los hogares; NAREDO, CARPINTERO y MARCOS para el patrimonio inmobiliario; y Contabilidad Nacional de España, para la renta disponible de los hogares y el PIB.

Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Renta y patrimonio.

Por otra parte, se mantuvo una importante desigualdad en el reparto de la renta y la riqueza, aunque ambas tuvieron evolución opuesta. **La distribución de la renta mejoró**, medida por el coeficiente de Gini, en tres puntos aunque se mantuvo siempre

⁸ Conviene advertir al/a lector/a no especializado/a las diferencias entre dos tipos de indicadores. Unos, como la renta y los salarios, o los ingresos y gastos del sector público, tienen carácter de **flujo** (lo que se ingresa o gasta cada año) y dependen principalmente del ritmo de crecimiento o decrecimiento de la actividad económica (producción y consumo). Otros, como la riqueza financiera o inmobiliaria de los hogares, el capital de las empresas, o la deuda pendiente de todos los sectores, tienen carácter de **stock** (lo que se acumula) y su valor monetario es muy sensible a los vaivenes del mercado, cada vez más sujeto a procesos especulativos como resultado de la globalización y la desregulación (cambios en la cotización de las monedas, de los valores bursátiles o del precio de la vivienda...). Para analizar la dinámica de las desigualdades sociales suele ser más relevante la información tipo stock (lo acumulado) que la que tiene carácter de flujo (ingresos o gastos de un momento específico).

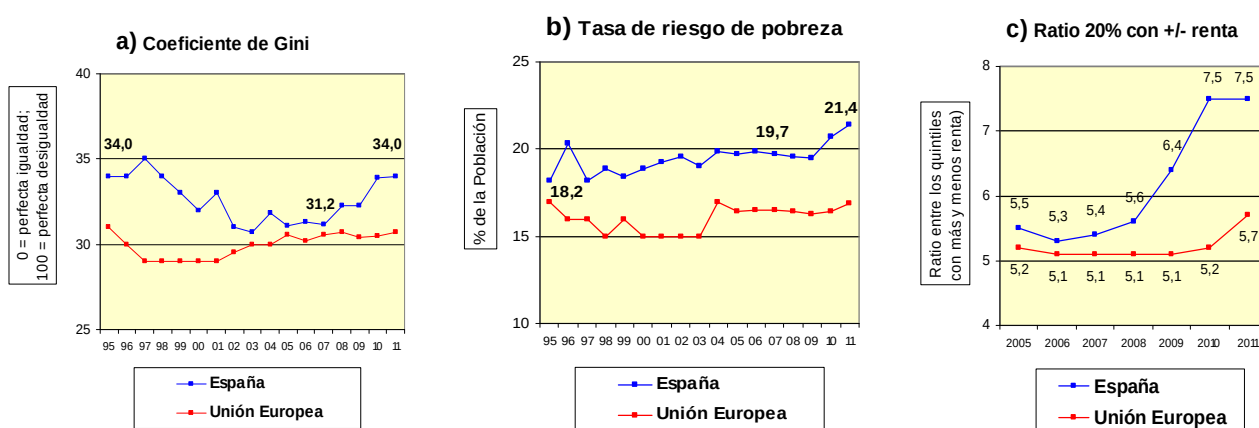
con peores resultados que la media comunitaria. En cambio, **la distribución de riqueza empeoró claramente**: según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, los hogares ricos incrementaron su patrimonio entre 2002 y 2005 a un ritmo mucho mayor que los pobres, dando como resultado que la ratio de desigualdad entre el 25% de hogares más ricos y más pobres pasara de 33,3 a 39,3.

Con la irrupción de la crisis la renta disponible percibida por los hogares se mantuvo en lento pero continuo ascenso en los primeros años de crisis (2008 y 2009), a pesar de la bajada del PIB, pero se redujo un 7,1% entre 2010 y 2011 en coincidencia con el cambio de política laboral y de recortes sociales iniciado por el gobierno del PSOE en la primavera de 2010. Por su parte, la riqueza agregada de los hogares se redujo un 23,4% entre 2007 y 2011: los bienes inmuebles perdieron el 26% de su valor (1,3 billones) y los activos financieros el 17% (350.000 millones, siempre en euros constantes de 2011). Pese a la profundidad de la crisis, el valor agregado de la riqueza de los hogares ha perdido bastante menos de la mitad de lo que había ganado en la etapa anterior, exactamente 1,7 de 4,3 billones de euros acumulados en el ciclo de crecimiento.

Tanto el reparto de la renta como de la riqueza han empeorado en el ciclo de crisis. El Coeficiente de Gini de distribución de la renta ha perdido los tres puntos ganados en la etapa de crecimiento (Gráfico 5a), generando entre otros efectos un aumento de los hogares en riesgo de pobreza (ingresos por debajo del 60% de la mediana) que han pasado del 18 al 21% (Gráfico 5b). Entre 2005 y 2011 la ratio o distancia entre la quinta parte de hogares con más y menos renta ha pasado de 5,5 a 7,5, lo que supone un aumento del 36,4% en sólo seis años, una tasa casi cuatro veces mayor que la de la Unión Europea (9,6%) (Gráfico 5c).

Gráfico 5

Distribución de la renta (coeficiente de Gini), riesgo de pobreza y ratio entre los quintiles de más y menos renta, en España y la Unión Europea (1995-2011)

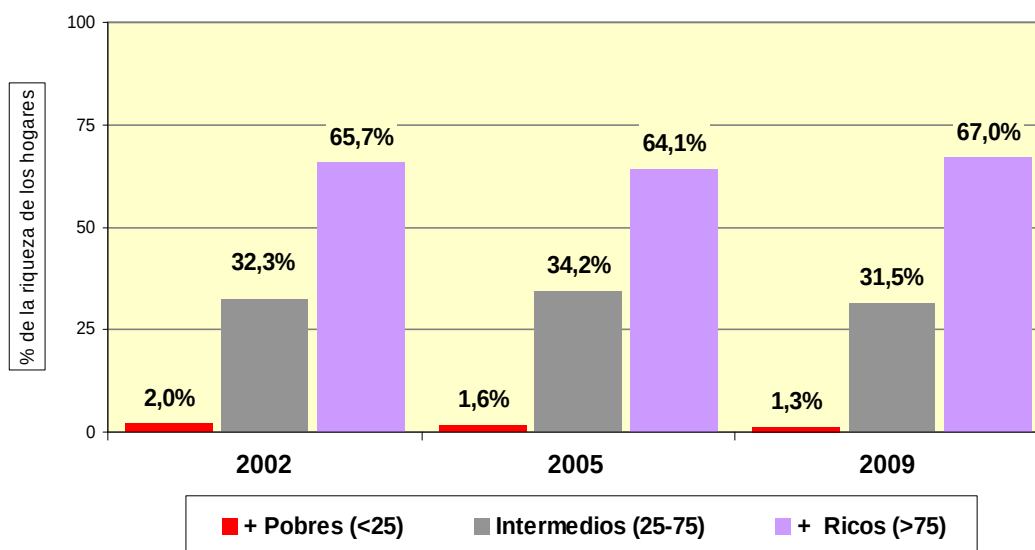


Fuente: EUROSTAT. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Renta y patrimonio.

En cuanto a la riqueza, la brecha de desigualdad entre los hogares más ricos y más pobres (ratio entre la riqueza de la cuarta parte con más y menos patrimonio) pasó de 39 a 50 entre 2005 y 2009, después de haber aumentado otros 6 puntos en los tres años anteriores (Gráfico 6). De este modo, la desigualdad es cinco veces más pronunciada (de 50 a 1 entre los cuartiles más rico y más pobre) que en el reparto de la renta (de 10 a 1 entre los grupos con más y menos ingresos); en ambos casos la tendencia en la coyuntura de crisis es a una creciente polarización social.

Gráfico 6

Desigual reparto de la riqueza en los hogares españoles (2002-2005-2009)



Fuente: Banco de España. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Renta y patrimonio.

La desigualdad en el reparto de la riqueza y de la renta remite a un modelo social cada vez más jerarquizado, al menos en la presente fase del capitalismo en la que la competitividad/ rentabilidad de las grandes empresas tiene como correlato el estancamiento o disminución de los salarios y la pérdida de derechos sociales y laborales. Frente a la opinión mayoritaria de que “la distribución de los ingresos en España es injusta” (siempre por encima del 80% en las encuestas del CIS), la política económica adoptada por los sucesivos gobiernos ha favorecido el incremento de dicha desigualdad a favor de las grandes empresas, con frecuencia transnacionales, y en contra de la mayoría de la población.

La recesión frena el deterioro ambiental, que vuelve a empeorar en 2011

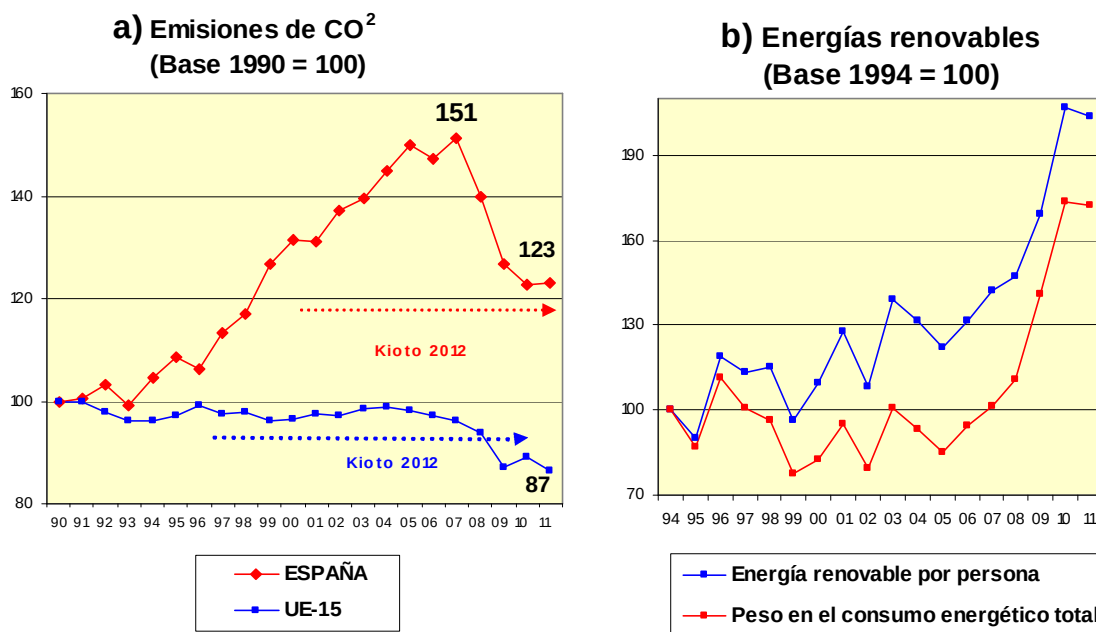
El modelo de crecimiento capitalista aplicado en España dio lugar en el ciclo de expansión (1994-2007) a un intenso deterioro de la calidad de la tierra, el agua y el aire. El consumo de energía se incrementó en un 50%, a un ritmo doble que la media europea, provocando que la dependencia energética de España pasara del 70 al 80% pese a la expansión de las energías renovables. El uso de plaguicidas en la agricultura aumentó en un 60%, con los consiguientes efectos contaminantes, y las emisiones de CO² crecieron tres veces más de lo comprometido en el Protocolo de Kioto (Gráfico 7a), a un ritmo similar al de China o la India, y muy superior a la media europea.

A partir de 2008 la recesión económica afectó a la producción industrial, agrícola y ganadera, a la construcción, al transporte y al consumo eléctrico, provocando una sustancial mejora de algunos indicadores ambientales: en 2010 las emisiones de CO² se habían reducido un 19% y el consumo energético un 11%, lo que permitía a España acercarse al cumplimiento de las exigencias del Protocolo de Kioto. Las energías renovables, cuyo peso en el consumo energético total era cada vez menor hasta 2002, doblaron su contribución pasando del 5,4 al 11,1% del mix energético (Gráfico 7b). Sin embargo, varios indicios apuntan a un cambio de tendencia en 2011: la

dependencia energética del exterior (sobre todo en petróleo y gas), que había bajado del 81,1% en 2005 al 73,6% en 2010 remontó hasta el 76,1% en 2011; las emisiones de CO² y la intensidad energética vuelven a repuntar, mientras las energías renovables experimentan una significativa caída que coincide con un freno de las subvenciones públicas.

Gráfico 7

Evolución de las emisiones de CO² y de las energías renovables (1994-2011)



Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Medio ambiente.

El consumo de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura se redujo en 2009 pero volvió a crecer en 2010 y 2011. La superficie cultivada con criterios ecológicos se ha venido ampliando todos los años, si bien España continúa en este punto por debajo de la media comunitaria. También ha mejorado el tratamiento y reciclado de residuos, aunque la proporción de papel reciclado ha disminuido en 2011 y no se han alcanzado las metas fijadas por el Plan Nacional de Residuos Urbanos. Por último, se han ampliado los espacios naturales protegidos pero se reduce la biodiversidad (más de 900 especies amenazadas en 2011).

El balance general muestra, por un lado, la importancia de las políticas estatales en la mejora de indicadores ambientales (mejora de la intensidad energética durante el mandato de C. Narbona en Medio Ambiente, desarrollo de las renovables en base a subsidios estatales) y, por otro, el conflicto que existe entre la dinámica del capitalismo actual y los límites de la base ecológica que lo sustenta. La huella ecológica mide la relación entre la biocapacidad (capacidad productiva y de absorción de residuos de las tierras y aguas del país) y la producción (sus consumos energéticos y residuos). Los datos muestran que en 2005 se necesitaba 4 veces el territorio de España para sustentar ecológicamente la producción del país; con el inicio de la crisis la situación mejoró algo: en 2008 “sólo” se necesita 3,3 veces dicha superficie⁹. Por tanto, el modelo productivo excede con creces la capacidad de sustentabilidad del territorio, lo que reclama una reconversión radical de sus características.

⁹ Ver Global Footprint Network, en <http://www.footprintnetwork.org>

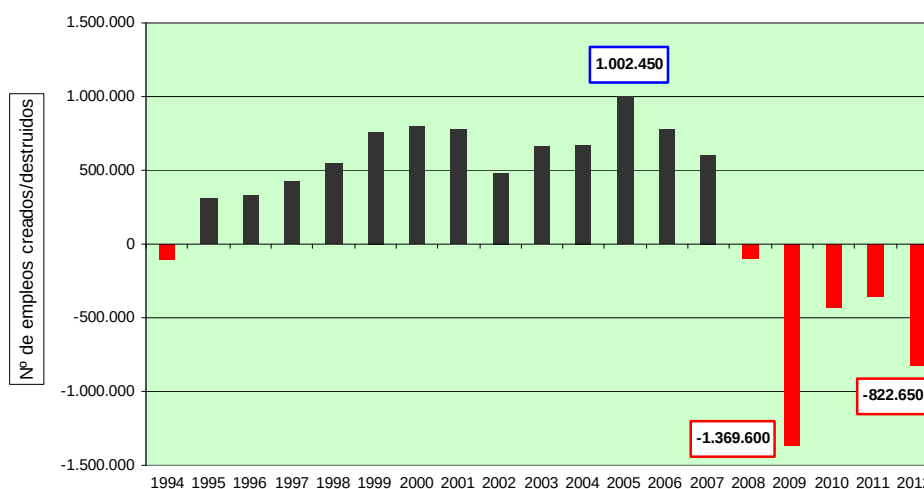
2. Efectos sociales de la crisis

Record de desempleo

Entre 1994 y 2007 los indicadores de acceso al empleo mejoraron considerablemente: la tasa de actividad creció del 51 al 60%, especialmente entre la población femenina; el número de empleos aumentó de 12 a 20 millones (3 de ellos para inmigrantes que produjeron un inesperado crecimiento de la población del país); y el paro se redujo en dos tercios, pasando del 23,9 al 8,3%. En cambio, en cinco años de crisis se han perdido tres millones de empleos y la tasa de paro supera en 2012 el 25%, record histórico de este indicador en números absolutos y relativos.

El Gráfico 8 recoge la creación o destrucción de empleo entre 1994 y 2012. Hasta 2007 se creó una media anual de 627.000 empleos, y entre 2008 y 2012 se han destruido anualmente 615.000, si bien la mayor parte se concentran en los años 2009 (1,3 millones) y 2012 (0,8 millones). Se trata del problema social más sentido por la población española según los barómetros mensuales del CIS, que sitúa a España junto a Grecia como farolillos rojos de la Europa comunitaria en esta materia.

Gráfico 8
Creación y destrucción de empleo en España (1994-2012)

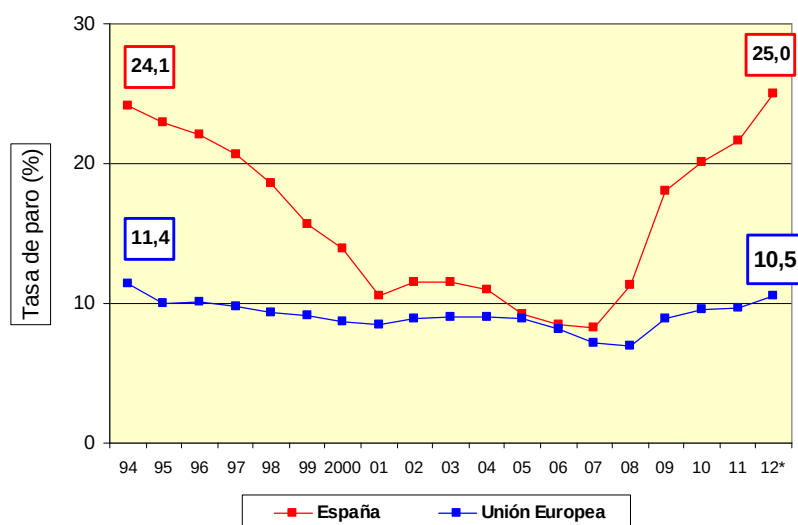


Fuentes: EPA y Eurostat. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Empleo.

Tanto la creación de empleo antes de la crisis como su destrucción posterior han tenido lugar con una intensidad mucho mayor que en el resto de la Unión Europea: en 2005 y 2006 la tasa española de desempleo llegó a situarse en la media comunitaria, para pasar a ser más del doble en la actualidad (Gráfico 9). Ello se debe principalmente a la elevada tasa de temporalidad y a la precariedad de los puestos de trabajo en sectores muy sensibles al ciclo económico (construcción, comercio, servicios no cualificados, etc.), donde se aplicó un modelo de explotación extensiva de la mano de obra que afectó en mayor medida a la juventud y al colectivo inmigrante (la tasa de contratación temporal de estos grupos en 2007, en pleno auge económico, era del 63 y 51%, respectivamente).

Gráfico 9

Evolución del desempleo en España y la Unión Europea (1994-2012)



Fuentes: EPA y Eurostat. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Empleo.

(*) El dato de 2012 de la UE-27 corresponde al mes de agosto.

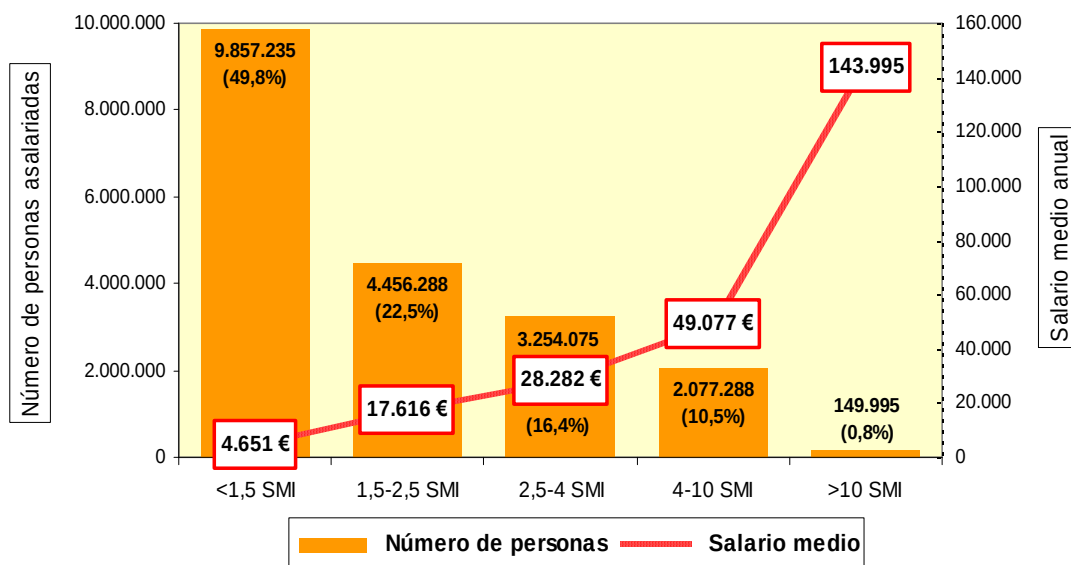
Polarización salarial y social

Ya hemos señalado que en el ciclo de expansión económica el salario medio se mantuvo prácticamente congelado, con ligeros altibajos según los años. Al iniciarse la crisis se registraron ligeros incrementos, del 0,9% en 2008 y del 0,8% en 2009; fueron dos años en los que el gobierno del PSOE trató de mantener los derechos sociales existentes y los acompañó con medidas de expansión de la demanda a través del gasto público (como el “plan E”). Sin embargo, a partir de 2010 se inició un cambio de orientación con las sucesivas reformas laborales y la política de recortes salariales, tanto del PSOE como del PP. El salario real medio retrocedió 4,8 puntos en el bienio 2010-2011, en lo que parece el inicio de una tendencia para los próximos años.

La desigualdad de ingresos entre los salarios era ya elevada y se ha ampliado con la crisis. La relación entre el salario medio de quienes ganaban cinco veces más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el quienes cobraban por debajo del SMI, era de 17,6 en 2007 y pasó a 18,5 en 2011. En suma, aumentó la distancia entre los “asalariados ricos” y los “asalariados pobres”. La situación existente en 2011 queda reflejada en el Gráfico 10, que muestra la magnitud de distintos segmentos de los asalariados y la de sus respectivos ingresos.

Gráfico 10

Diferencias de salario por tramos en 2011



Fuente: AEAT, Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Renta y patrimonio.

- **Tramo inferior mayoritario (menos de mil euros/mes):** formado por quienes perciben salarios en cómputo anual por debajo de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), o sea, menos de 962 euros/mes (el SMI era de 641 euros), a los que añadimos los dos millones de personas en paro de larga duración¹⁰. Aquí se sitúa el 50% de las personas asalariadas y desempleadas, cuyo ingreso medio anual es de 4.651 euros (388 euros/mes). Dentro de este gran colectivo los problemas se incrementan para algunos segmentos específicos como las personas en *paro de larga duración* (más de un año continuado buscando empleo) que han pasado del 21 al 49% de la población desocupada entre 2007 y 2012; *las que no reciben ninguna prestación* (ni contributiva ni asistencial) que han subido del 23,5 al 49,6%; y *los hogares con todas las personas activas en paro*, que se han cuadruplicado en el mismo lapso de tiempo (del 2,4 al 10,1%).
- **Tramo medio-bajo (milleuristas y poco más):** comprende a los asalariados que perciben entre 962 y 1.603 euros/mes. Es un grupo numeroso, que incluye a más de un quinto (22,5%) de la población asalariada-desocupada.

Los dos segmentos anteriores experimentaron el mayor crecimiento cuantitativo durante el período de auge económico, lo que permitió mantener en niveles bajos el incremento del salario real medio.

- **Tramos medios:** encontramos aquí dos grupos de tamaño decreciente. El primero reúne al 16,4% de la población asalariada-desocupada y percibe entre 1.603 y 2.564 euros mensuales. El segundo, que agrupa al 10,5% de la población, percibe ingresos salariales en el tramo de 2.564 a 6.410 euros. Con sus diferencias, estos dos segmentos suman un 25% que constituye el colchón entre la mayoría de bajos ingresos y las élites funcionales (económicas y administrativas).

¹⁰ Estas personas, con más de un año consecutivo en paro, no figuran en la Estadística de salarios de la AEAT pero deben aparecer en el cómputo general de la población sometida a la relación salarial.

- **Tramo superior minoritario (más de seis mil euros/mes):** en el vértice de la distribución salarial se sitúan 156.000 personas (0,8% del total) que perciben un salario medio de 12.000 euros mensuales. En este grupo se sitúan los 534 consejeros y miembros de la alta dirección de las empresas incluidas en el Ibex 35 cuyos ingresos medios en 2011 fueron de 73.000 euros mensuales, 25 veces más que el salario medio de sus empresas, además de cobrar indemnizaciones millonarias en el caso de abandono del cargo. Se trata de un grupo social formalmente asalariado pero cuyas funciones son las de dirección de las empresas representando directamente los intereses de sus propietarios.

Las desigualdades salariales por sexo y edad siguen siendo elevadas y han aumentado en la última década. En 2000 la retribución media de las mujeres era un 22,7% inferior al salario medio y la desventaja pasó al 31,5% en 2011; por su parte, la de los jóvenes se incrementó del 54,1% al 60,6%. Por sectores de actividad, el menos remunerado es agricultura-pesca con un salario medio cinco veces inferior al percibido en el sector financiero, el de mayores ingresos salariales. La mano de obra extranjera, a su vez, recibe por su trabajo un 49,2% menos que la española.

Por comunidades autónomas, el salario medio más elevado en 2011 se registra en Madrid (23.745 euros/año), seguida de Cataluña (20.390) y Asturias (19.022). En el otro extremo se sitúan Extremadura, Andalucía y Murcia, con un salario medio un 40% por debajo de las primeras. Sin embargo, en perspectiva histórica se registra una tendencia al equilibrio entre comunidades, salvo en algunos casos como Andalucía y Canarias que han visto reducir los salarios por encima de la media estatal en las dos últimas décadas (-5,2 y -2,8%, respectivamente).

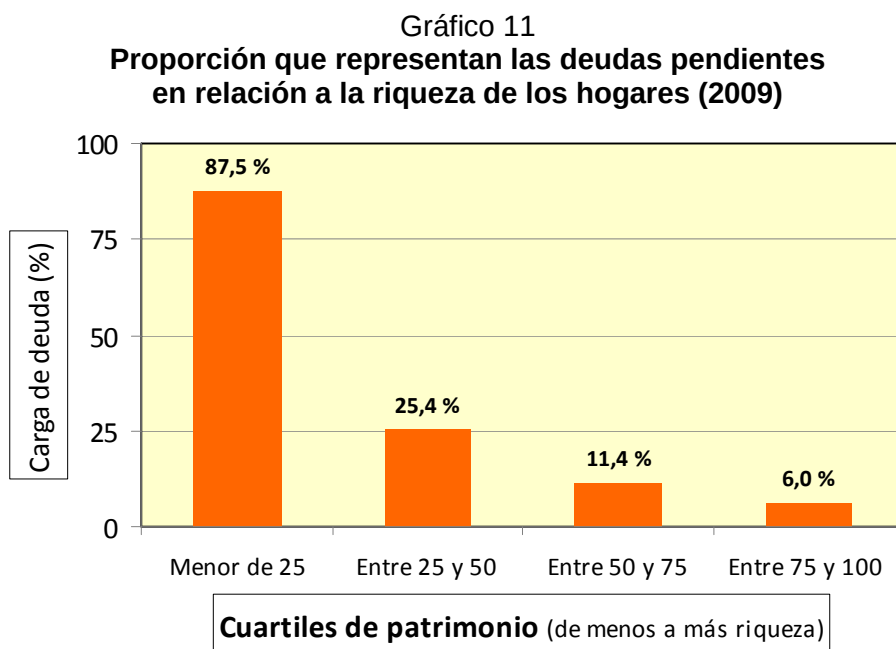
A partir de estadísticas impositivas de los últimos 30 años recogidas por *The World Top Incomes Database*, sabemos que el 1% de la población española con mayores ingresos (salariales y no salariales) incrementó su participación en la renta española en un 21,5%, a costa del 99% restante que la redujo en un 1,8%. Ascendiendo hasta la cúspide de la pirámide se constata que el 0,1% con mayores ingresos (15.000 hogares) consiguió un incremento del 40,1%, y el 0,01% (1.500 familias) alcanzó el 73,1%. En definitiva, más allá de fluctuaciones coyunturales, la etapa de capitalismo neoliberal ha generado un creciente acaparamiento de la riqueza social en el vértice de familias más adineradas. Y esta concentración de poder se traduce también, como señalan Navarro, Torres y Garzón, “en la aparición de espacios de decisión cada vez más ajenos al de los poderes representativos a los que se ha puesto de moda denominar como ‘los mercados’, pero que en realidad son los grandes financieros, directivos y representantes de las grandes corporaciones que tienen una influencia decisiva sobre el poder político, hasta el punto de que es impensable que los gobiernos tomen hoy día decisiones si no es bajo su tutela”¹¹.

¹¹ NAVARRO, V., TORRES, J. y GARZÓN, A., *Hay alternativas*, Sequitur – Attac España, Madrid, 2011, pág. 202.

Endeudamiento y desahucios

Durante el ciclo económico expansivo la venta de la creciente producción, en un contexto de no crecimiento del salario real, se realizó en base a dos mecanismos principales: por un lado, el aumento de la demanda agregada (la masa salarial) derivada del aumento de ocho millones de personas ocupadas; por otro, la concesión masiva de créditos al consumo y muy especialmente para la compra de vivienda. Las deudas de los hogares suponían en 1944 el 66% de su renta anual, y pasaron al 150% en 2007, proporcionando un volumen de negocio al sistema financiero de un billón de euros.

En el ciclo de crisis el volumen de deuda de los hogares apenas se ha reducido; además, grava mucho más a las familias pobres: según la Encuesta Financiera de las Familias (Banco de España 2009) la deuda pendiente de los hogares pobres suponía una carga 17 veces mayor en relación a su patrimonio que en el caso de los hogares con mayor riqueza (Gráfico 11).



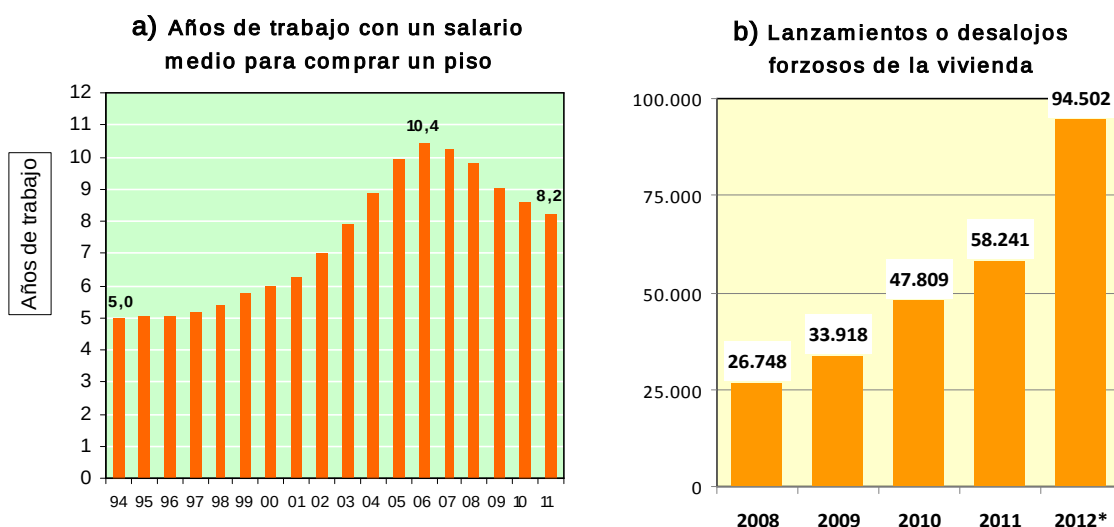
Fuente: Banco de España. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Renta y patrimonio.

En el ciclo expansivo las plusvalías del patrimonio inmobiliario ligadas al encarecimiento de la vivienda enriquecieron a los propietarios de suelo y promotores inmobiliarios a costa de endeudar a los compradores. Al final del ciclo, estos últimos necesitaban doble número de salarios que al comienzo para adquirir una vivienda (Gráfico 12a), cuyo destino principal no era proveer los costes de la construcción del inmueble sino proporcionar beneficios desorbitados a los propietarios del suelo y a los promotores¹².

¹² Según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la parte del precio de venta destinada a beneficios de propietarios de suelo y promotores inmobiliarios (con frecuencia la misma persona jurídica) pasó del 16,5% en 1996 al 49,3% en 2004.

Gráfico 12

Años de trabajo necesarios para comprar un piso medio y lanzamientos o desalojos forzados de la vivienda (varios años)



Fuente: Banco de España. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Vivienda.

(*) El dato de lanzamientos de 2012 recoge sólo el primer semestre, incluyendo los correspondientes a los Tribunales Superiores de Justicia, únicos publicados hasta 2011, y los de Juzgados de Primera Instancia.

Entre 2007 y 2011 el precio del metro cuadrado de vivienda libre se ha reducido un 22,4%, según el Ministerio de Fomento, pero más de 300.000 familias afectadas por la crisis y el desempleo no han podido hacer frente a sus deudas hipotecarias provocando un aluvión de desahucios. A estos se añaden los de quienes no pueden pagar el alquiler, entre 60.000 y 70.000 cada año en el ciclo de crisis, lo que suma en total más de medio millón de familias desalojadas de sus viviendas. Las estadísticas de ejecuciones hipotecarias, desahucios de alquileres y lanzamientos, proporcionadas por el Consejo General del Poder Judicial, se han caracterizado por su hermetismo y falta de precisión. Hasta 2008 no se publicaron los datos de lanzamientos y sólo a partir del primer trimestre de 2012 se publican los ejecutados por los Juzgados de Primera Instancia, cuyo número -en el primer semestre del año- supera en un 57% a los ejecutados por los Tribunales Superiores de Justicia de cada provincia, que eran los únicos publicados hasta ahora (Gráfico 12b).

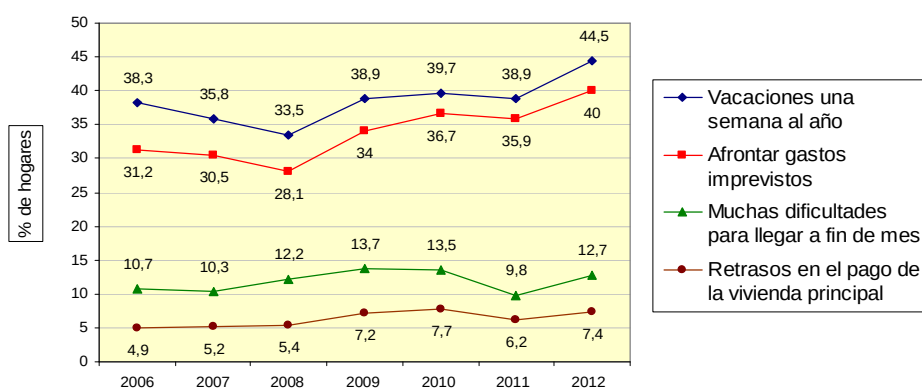
Deterioro de las condiciones de vida

El desarrollo de la crisis y las políticas adoptadas han generado graves problemas para un amplio sector de la clase trabajadora, muy especialmente para quienes se encuentran en paro, sobre todo si no reciben ninguna prestación de desempleo (2,8 millones de personas) y/o todos los miembros de su grupo de convivencia se encuentran sin trabajo (uno de cada diez hogares). A partir de 2010 los salarios y la renta disponible de los hogares caen a ritmo creciente y la población en riesgo de pobreza (ingresos del hogar por debajo del 60% de la mediana, según la definición de Eurostat) ha aumentado en más de un millón de personas (del 19,6% en 2007 al 21,1% en 2011). Las subidas del IVA, de la luz o del transporte, junto al congelamiento de las pensiones, contribuyen a reducir el poder adquisitivo de la mayoría de la población.

La Encuesta de Condiciones de Vida de 2012 confirma que las dificultades económicas de los hogares han crecido: el 45% no puede disfrutar de una semana de vacaciones al año y cuatro de cada diez no tienen recursos para afrontar gastos imprevistos; también ha aumentado la proporción de hogares con “muchas dificultades para llegar a fin de mes” o quienes pagan con retraso la cuota correspondiente a su vivienda principal (Gráfico 13).

Gráfico 13

Dificultades económicas de los hogares en el ciclo de crisis (2006-2012)



Fuente: INE, Encuesta de condiciones de vida. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Renta y patrimonio.

También las dificultades económicas se reparten con muchas desigualdad. Entre los grupos más afectados destacan la *inmigración no comunitaria*, cuya tasa de riesgo de pobreza llegaba en 2011 al 49%, más del doble que la de la población autóctona¹³; los casi cuatro millones de *personas con diversidad funcional*, cuyo acceso al empleo en la edad laboral (28%) está muy por debajo de la media general del país (66%) y tienen que depender de ayudas públicas que se encuentran en proceso de recortes¹⁴; y la *minoría gitana*, que sigue padeciendo problemas de marginación social, residencial y escolar.

Más allá del ámbito monetario es preciso contemplar los cambios del *trabajo doméstico y de cuidados*, que constituye un componente esencial del bienestar de las personas, aunque es invisibilizado por el discurso social y económico dominante. Según la Encuesta de Empleo del Tiempo de 2010 dichas tareas insumen un 23% más que el tiempo total dedicado al trabajo remunerado, y recae mayoritariamente sobre las mujeres. A medida que éstas amplían su presencia en el empleo remunerado, los hombres se han implicado más en las tareas del hogar (realizaban el 18% del trabajo doméstico en 1991, el 25% en 2003 y el 30% en 2010). Sin embargo, estamos muy lejos de un equilibrio entre sexos: hoy la carga de trabajo global (doméstico y extradoméstico) de las mujeres supera en un 20% a la masculina. Por otra parte, un análisis más afinado de esta evolución debe tener en cuenta el aporte de mano de obra externa, sobre todo de mujeres inmigrantes, para el trabajo doméstico y de cuidados, así como la figura del cuidado personal de la Ley de Dependencia¹⁵.

¹³ COLECTIVO IOÉ, *Impactos de la crisis sobre la población inmigrante*, Organización Internacional para las Migraciones, Madrid, 2012. En <http://www.colectivoioe.org/uploads/0bae582aa3b0842a9eaf50cde16f4f97d9527bcb.pdf>

¹⁴ COLECTIVO IOÉ, *Discapacidades e inclusión social*, Obra Social “la Caixa”, Barcelona, 2012. En <http://www.colectivoioe.org/uploads/87bc098a6f562c6b23ecab8453c5f44708ee0711.pdf>

¹⁵ Ver CARRASCO, C., BORDERÍAS, C. y TORNOS, T. (eds.), *El trabajo de cuidados*, Catarata, 2011; VEGA, C., *Culturas del cuidado en transición*, UOC, Barcelona, 2009; y OROZCO, A.P. y GIL, S.L., *Desigualdades a flor de piel: cadenas globales de cuidados*, ONU Mujeres, 2011.

2. Tendencias de las políticas sociales

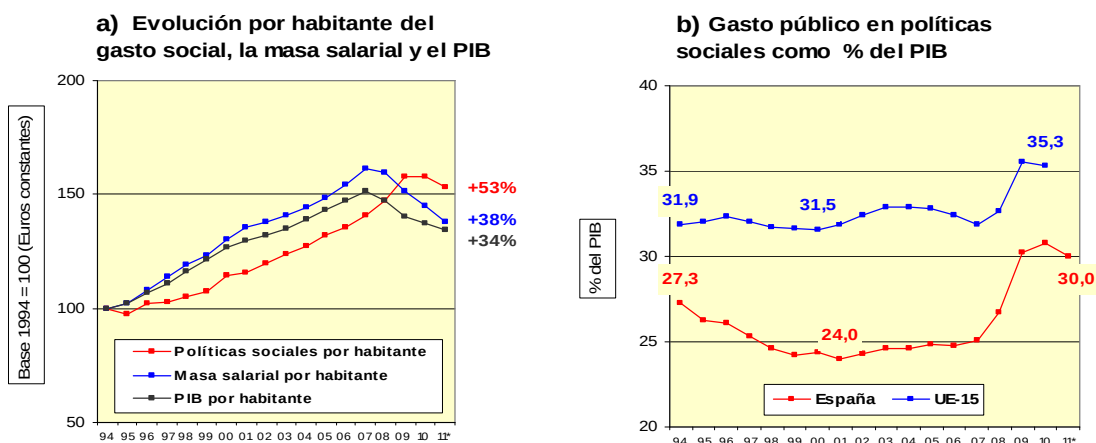
A continuación presentamos, en primer lugar, la evolución del gasto público en políticas sociales, destacando su importancia como mecanismo de redistribución social. En segundo lugar, se describen los cambios en las principales partidas presupuestarias: pensiones, sanidad, educación y prestaciones de desempleo. Por último, hacemos un breve balance de las políticas de ajuste adoptadas a partir de 2010 por los gobiernos del PSOE y del PP, y aportamos algunas reflexiones sobre el creciente malestar social y las movilizaciones que pretenden un giro social o un cambio de paradigma en el modelo político y económico vigente.

Peso e importancia de las políticas sociales

Los impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social son la base de las políticas sociales públicas¹⁶ que constituyen el *salario indirecto* de los hogares. En 2010 su aporte en servicios y prestaciones equivalían al 94% de la masa salarial. Por tanto, en términos gruesos, el salario indirecto global tiene casi la misma magnitud que el total de salarios directos. A pesar de este importante volumen, el gasto de España en políticas sociales en relación al PIB ha sido siempre inferior a la media de la Unión Europea durante los últimos 20 años (Gráfico 14b). Su evolución en euros constantes por persona muestra que el gasto público en políticas sociales creció un 57% entre 1994 y 2010, pasando por dos fases: hasta 2007, en el ciclo de crecimiento, los gastos sociales aumentaron a un ritmo algo inferior a la masa salarial o al PIB, una tendencia que se invirtió en los siguientes años de crisis, hasta 2010, a favor de los gastos sociales, para experimentar una nueva bajada en 2011 cuando los recortes comenzaron a aplicarse de forma sistemática en los presupuestos generales del Estado, como comentaremos más adelante (Gráfico 14a).

Gráfico 14

Gasto público en políticas sociales en España (1994-2011)



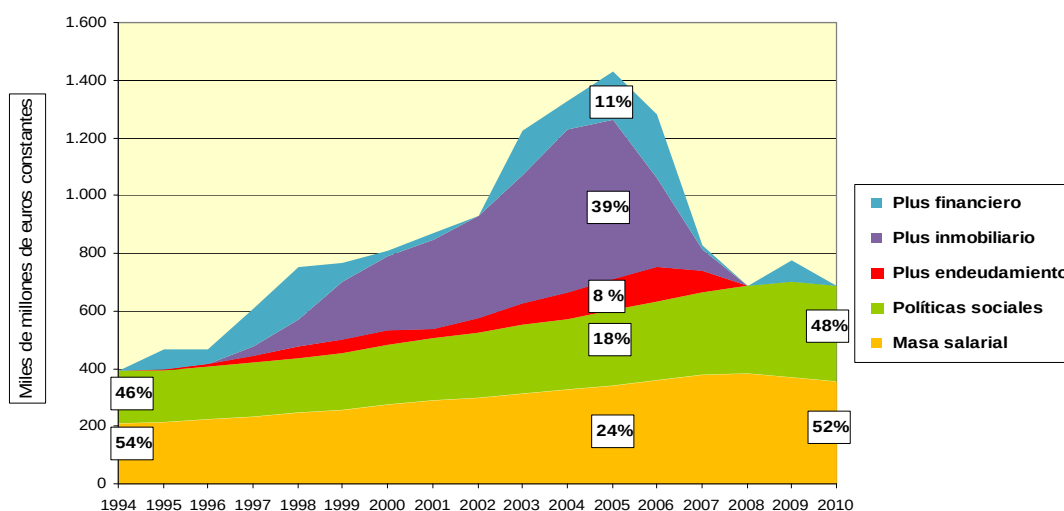
Fuentes: Eurostat para gastos sociales (Sistema SEEPROS) y Ministerio de Educación para gasto público en educación, AEAT para la masa salarial y Contabilidad Nacional de España para el PIB. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Protección social. Estimación para el año 2011 a partir de datos oficiales..

¹⁶ En las políticas sociales incluimos los ocho capítulos del sistema SEEPROS (Salud, Discapacidad, Pensiones, Supervivencia, Desempleo, Familia-hijos, Vivienda y exclusión social) y educación pública.

Las políticas sociales constituyen el principal mecanismo de redistribución social y suponen para los hogares una importantísima vía de ingresos, sea en prestaciones dinerarias (como las pensiones o las prestaciones de desempleo) o no dinerarias (como la sanidad o la educación públicas). Esto explica que el coeficiente de Gini de distribución de la renta gane 15 puntos de equilibrio en el caso de España, bajando de 47 antes de la redistribución estatal a 33, gracias al aporte que supone para las rentas más bajas la percepción de pensiones y otras ayudas sociales¹⁷.

Gráfico 15

Ingresos de los hogares: salario directo e indirecto, y plus anual de deudas, inmuebles y finanzas (1994-2010)



Fuentes: Eurostat para gastos sociales (Sistema SEEPROS) y Ministerio de Educación para gasto público en educación, AEAT para la masa salarial, Contabilidad Nacional de España para deudas de los hogares, Banco de España para activos financieros y NAREDO, CARPINTERO y MARCOS para el patrimonio inmobiliario. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Renta y patrimonio.

El peso de estas prestaciones respecto al conjunto de los ingresos de los hogares varía en función de la evolución experimentada cada año por otros factores, como los créditos o la revalorización del patrimonio inmobiliario y financiero¹⁸ (Gráfico 15). Estos últimos factores se dispararon entre 1997 y 2007, generando en el pico más alto de la burbuja financiera-inmobiliaria (año 2005) el 68% de los ingresos globales de los hogares¹⁹. Esto supuso que las prestaciones sociales perdieran importancia (desde el

¹⁷ COMISIÓN EUROPEA, *Why socio-economic inequalities increase? Facts and policy responses in Europe*, 2010.

¹⁸ El Gráfico 15 recoge los saldos positivos de cada año, o plus de valor monetario en euros constantes, del crédito pendiente de los hogares y de su patrimonio inmobiliario y financiero. No se recogen los años con saldo negativo ya que se trata de expresar sólo el flujo de “ingresos”.

¹⁹ Sin embargo, la revalorización experimentada por tales indicadores se reparte con una gran desigualdad: los créditos dan lugar a una carga de deuda desproporcionada en los hogares pobres, como hemos visto, mientras las finanzas y los inmuebles se concentran en los hogares ricos. Según la *Encuesta Financiera de las Familias* del Banco de España (2009), el 25% de hogares más ricos concentraba el 65,1% del patrimonio inmobiliario y el 95,8% de las acciones y fondos de inversión, mientras el cuartil más pobre disponía del 4,2% y 3,1%, respectivamente. En otras palabras, los ricos concentraban un

46% en 1994 al 18% en 2005), a pesar de que su magnitud se incrementó. En cambio, en 2010 -tras la caída de ingresos financieros, inmobiliarios y crediticios- los recursos aportados por las políticas sociales aportan el 48% de los ingresos de los hogares. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia crucial que tienen las prestaciones públicas para los sectores de población de menores ingresos.

Evolución de las principales partidas presupuestarias

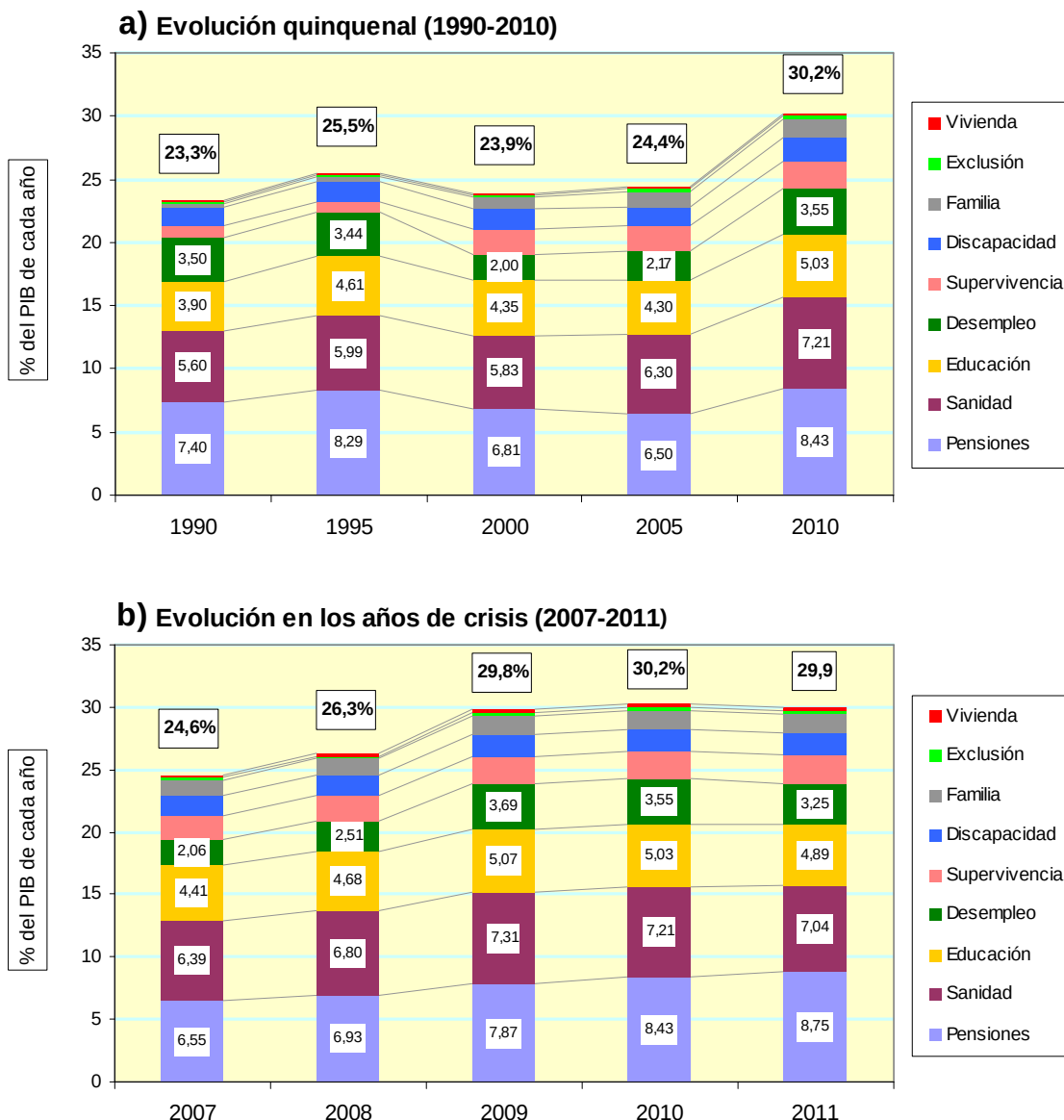
La tendencia del gasto público en políticas sociales se puede seguir con precisión a través del sistema SEEPROS homologado por Eurostat. A los ocho capítulos recogidos por esta fuente añadimos el gasto público en Educación. El epígrafe “Supervivencia” incluye las pensiones pagadas a personas menores de 65 años a raíz de la muerte del titular del derecho a una pensión (viudos/as y huérfanos/as) y el de “Exclusión” las rentas básicas de inserción así como el gasto en servicios y prestaciones básicas para ayudar a personas “desamparadas”. El Gráfico 16 recoge la evolución experimentada por las diferentes rúbricas de la política social. Los datos correspondientes a 2011 son provisionales.

El gasto en políticas sociales –incluida la educación- experimentó un importante crecimiento en los 25 primeros años de régimen democrático (1975-1990), al pasar del 16 al 23% del PIB, aunque esta tasa todavía se encontraba alejada de la media comunitaria (30% en 1990 para la UE-15). Desde entonces el gasto social se ha estancado en torno al 25%, con subidas relativas en los quinquenios coincidentes con períodos de crisis (2 puntos de PIB en 1990-95 y cinco puntos 2005-10) y ligero retroceso en los quinquenios expansivos (1995 a 2005) (Gráfico 16a). En los recientes años de crisis el incremento en 5,2 puntos de las políticas sociales se ha producido casi exclusivamente en dos años (2008, 1,7 puntos, y 2009, 3,5 puntos) para estancarse y revertir en los años siguientes, una vez introducida y profundizada la política de recortes en la primavera de 2010 (Gráfico 16b):

- En el bienio 2008-2009 la partida que más creció fue la de prestaciones de desempleo (1,6 puntos de PIB, 17.000 millones de euros corrientes de aquellos años), seguida por las pensiones (1,3 puntos), sanidad (0,9 puntos) y educación (0,7 puntos); las otras cinco políticas sociales se incrementaron en conjunto 0,7 puntos, destacando familia e hijos (0,26 puntos) y discapacidad (0,21 puntos). Sólo la partida de “exclusión” redujo su participación con respecto al PIB en esos dos años (-0,02 puntos, 210 millones de euros), precisamente cuando más empleo se destruía en España y más crecía el riesgo de exclusión.
- En el bienio 2010-2011 el gasto social se frenó primero (+0,4 puntos el primer año) y remitió ligeramente después (-0,3 puntos), afectando principalmente a las prestaciones de desempleo (-0,44 puntos de PIB), la sanidad (-0,27) y la educación (-0,18). Las pensiones siguieron creciendo en relación al PIB, aunque cada año a un ritmo más lento.

patrimonio inmobiliario 15,4 veces mayor que los pobres y un patrimonio financiero de acciones y fondos 27,4 veces mayor.

Gráfico 16

Distribución del gasto público en políticas sociales (1990-2011)

Fuentes: Eurostat para gastos sociales (Sistema SEEPROS) y Ministerio de Educación para gasto público en educación. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Protección social. Estimación provisional para 2011.

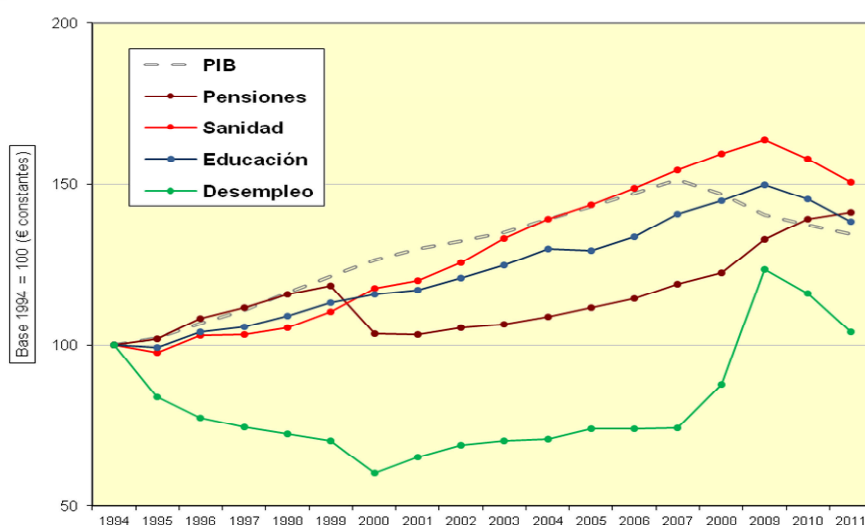
Las principales partidas de política social son las destinadas a pensiones, sanidad, educación y prestaciones de desempleo. Entre las cuatro suponían en 2011 el 80% del gasto social y el 24% del PIB. El Gráfico 17 recoge su evolución en euros constantes por persona (base 1994 = 100).

Los recursos destinados a sanidad y educación experimentaron un crecimiento ligeramente por debajo del PIB por persona en la fase expansiva de la economía, para situarse por encima en la etapa de crisis a pesar de los descensos experimentados en 2010 y 2011, pues su contracción resultó inferior a la del conjunto de la economía. Las pensiones aumentaron a un ritmo bastante menor que el PIB hasta 2008 pero es la única partida que ha continuado creciendo hasta 2011, año en que superan a los

gastos en educación. El volumen destinado a prestaciones de desempleo bajó mucho en la fase expansiva debido a la reducción del paro, y creció intensamente en 2008 y 2009, en paralelo con la destrucción de empleo, para descender en 2010 y 2011 al finalizar el período de cobro de la prestación por parte de gran parte de los parados y paradas de larga duración. En suma, en tanto el Estado avala o rescata al sistema bancario su política de recortes ha deteriorado los recursos destinados a sanidad, educación y desempleo, mientras reduce el ritmo de ampliación de la partida destinada a pensiones.

Gráfico 17

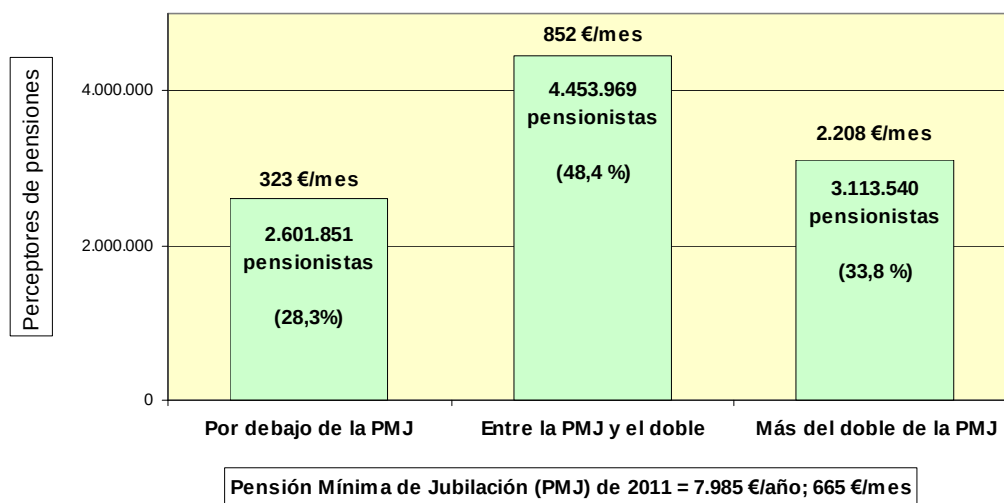
Evolución de las principales partidas del gasto social (1994-2011)



Fuentes: Eurostat para gastos sociales (Sistema SEEPROS) y Ministerio de Educación para gasto público en educación. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Protección social. Estimación provisional para 2011.

Las pensiones representan algo más de la cuarta parte del gasto social público. Cubren a la práctica totalidad de la población anciana, ya sea mediante prestaciones contributivas (94,7%) o no contributivas (5,3%). La pensión contributiva media ha venido experimentando una lenta pero continua revalorización de poder adquisitivo que tuvo su momento de mayor incremento anual en 2009 (5,1%), a raíz de la decisión gubernamental de subir las pensiones mínimas. No obstante, en 2011 había 2,6 millones de perceptores que cobraban por debajo de la pensión mínima de jubilación, (Gráfico 18). Según la estadística de pensiones de la Agencia Tributaria la pensión media percibida por ese segmento de personas mayores fue de 323 euros/mes.

Gráfico 18

Distribución de las pensiones en España, por tramos (2011)

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Protección social.

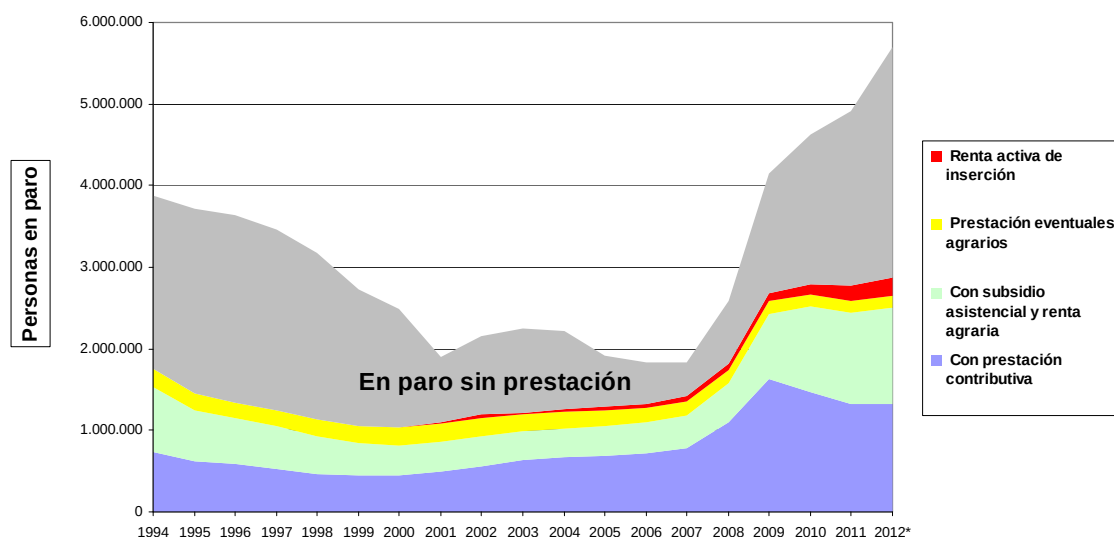
La sanidad pública suponía en 2011 el 23,5% del gasto social (7% del PIB, tres décimas menos que en 2009, cuando se registró la tasa más alta de los últimos 20 años). En 2011 el presupuesto de sanidad del conjunto de las administraciones públicas ha sufrido un recorte del 4,2% (2.762 millones de euros) y en 2012 del 7,5% (4.633 millones de euros), dando lugar a cierres de servicios y reducciones de plantillas.

La educación pública recibía en 2011 el 16,3% del gasto social (casi el 4,9% del PIB, dos décimas menos que en 2009, año que también registró la máxima tasa de las últimas dos décadas). Sin embargo, las informaciones disponibles indican que los recortes presupuestarios, valorados en euros constantes, alcanzaron el 4,6% en 2011 (2.000 millones de euros) y el 9,6% en 2012 (4.000 millones). Esta significativa reducción de recursos se plasma en recortes de plantillas y aumento de las horas lectivas del profesorado; ampliación del número de alumnos por aula; menor cobertura de bajas del personal docente; recortes en transporte y comedores; incremento del precio de las matrículas universitarias, etc.

Las prestaciones de desempleo han tenido, al comienzo de la crisis, un comportamiento anticíclico, experimentado su mayor incremento en los primeros años de crisis, en especial en 2009 (+47%) como consecuencia de la destrucción de 1,4 millones de empleos en ese año. Sin embargo, a partir de 2010 el monto medio de las prestaciones se ha ido reduciendo a medida que aumentaba el peso de las asistenciales. Además, existe una creciente proporción de personas en paro que no recibe ninguna prestación, ni contributiva ni asistencial, que ha pasado del 23,5% en 2007 al 49,6% en 2012 (Gráfico 19). En este último año hay 2,9 millones de personas sin empleo que no reciben ninguna prestación. Entre las que perciben algún ingreso predominan las prestaciones asistenciales (1,6 millones), de menor cuantía, que las contributivas (1,3 millones).

Gráfico 19

Evolución de las prestaciones de desempleo, según tipos (1994-2012)



Fuentes: Boletín de Estadísticas laborales y Encuesta de Población Activa. Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Protección social.

(*) Para el año 2012 se recoge la media mensual de beneficiarios entre enero y octubre.

Las restantes partidas de gasto social presentan una evolución muy desigual: familia es la que más ha crecido, triplicando su peso en relación al PIB entre 1994 y 2010 (del 0,4 al 1,5); le siguen vivienda, supervivencia y exclusión, que han doblado su presupuesto en relación al PIB; por último, la partida de discapacidad ha sido la de menor crecimiento de los últimos 15 años (+9,3%, de 1,64 a 1,79 en términos de PIB).

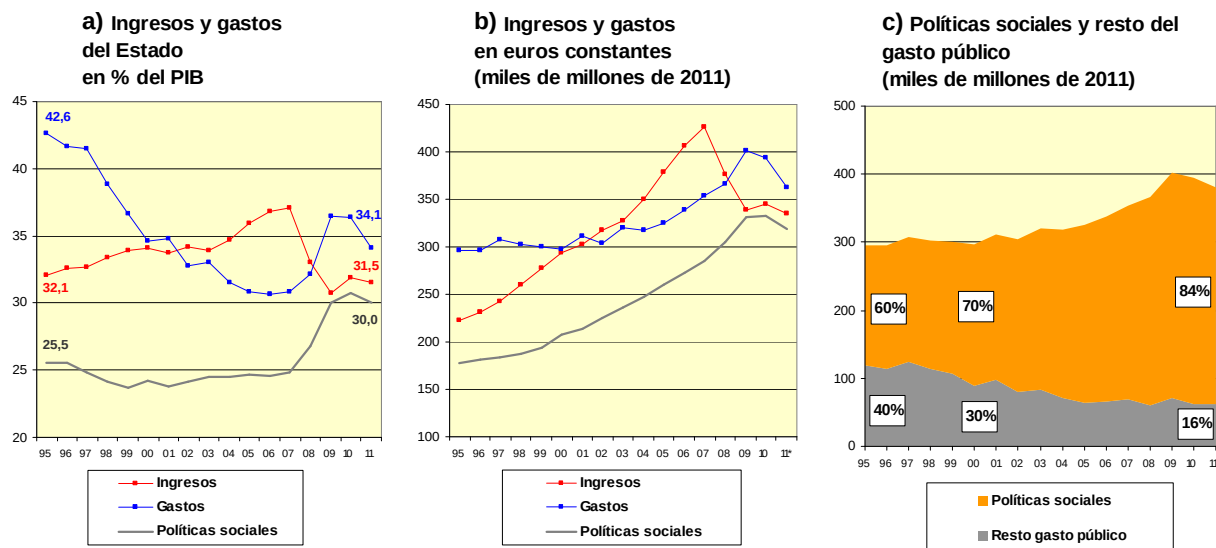
La política de recortes incrementa el malestar y la movilización social

La tesis oficial del gobierno español sostiene que las políticas sociales están sobredimensionadas en relación a la capacidad económica de la hacienda pública y que, por tanto, es imprescindible introducir recortes en las prestaciones y servicios, así como procesos de privatización que impliquen una reducción del gasto. Consecuentemente, el problema de la *deuda pública* es presentado como la clave de la crisis del Estado de bienestar. El gasto público en relación al PIB creció desde el 30,6% en 2006 al 34,1% en 2011, como consecuencia de un aumento del gasto (sobre todo en prestaciones de desempleo), y una caída de cinco puntos en la recaudación fiscal, (desde el 36,8% al 31,5% del PIB) (Gráfico 20a). El resultado de esta evolución es el déficit fiscal del Estado que llegó en 2011 al 8,9% del PIB y el gobierno quiere reducir al 4,5% en 2013 y al 2,8% en 2014. Unos objetivos que muy probablemente sean imposibles de cumplir teniendo en cuenta la recesión económica y la magnitud de los vencimientos de deuda pública que el Estado debe pagar en los próximos años²⁰.

²⁰ A mediados de 2012 los vencimientos de deuda pública de la administración central del Estado previstos para 2013 eran de 91.014 millones de euros, de 62.397 para 2014 y de 55.511 para 2015. Estas cantidades se unen al déficit fiscal de ingresos y gastos ordinarios, forzando al Estado a poner en el mercado nuevas emisiones de deuda pública para evitar la quiebra.

Gráfico 20

Ingresos y gastos del Estado (1995-2011)



Fuentes: Ministerio de Economía para ingresos y gastos del Estado; y Eurostat para gastos sociales (Sistema SEEPROS) y Ministerio de Educación para gasto público en educación.

Elaboración del Barómetro social de España, ámbitos de Renta y patrimonio, y Protección social.

(*) Estimación provisional para 2011.

El Gráfico 20b muestra que a mediados de los años noventa del siglo pasado existía en España un déficit fiscal bastante mayor que el actual. El gobierno aplicó con rigor el tratado de Maastricht, logrando el equilibrio presupuestario en el año 2000 gracias a la contención del gasto (que se estabilizó en torno a 300.000 millones de euros anuales entre 1995 y 2000) y a un aumento sustancial de los ingresos (de 225.000 millones de euros en 1995 a 300.000 en 2000) procedentes de dos vías: la venta/privatización de grandes empresas públicas²¹ y el aumento de ingresos fiscales correspondientes a la entrada en un nuevo ciclo expansivo de la economía (no precisamente a la presión fiscal). Después, entre los años 2001 y 2007 el boom económico favoreció que los ingresos del Estado crecieran a un ritmo interanual del 5,5%, el doble que el incremento del gasto (2,6%) lo que dio lugar a un creciente superávit fiscal (a costa de una ralentización de las políticas sociales que crecieron a un ritmo menor que el conjunto de la economía). Sin embargo, al llegar la crisis se reducen los ingresos fiscales (-12% en 2008 y -10% en 2009, máximas bajadas de los últimos 20 años) y aumentan los gastos sociales (3% en 2008 y 10% en 2009) provocando de nuevo un gran déficit en las cuentas públicas que los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han tratado de contener en los años siguientes mediante sucesivos recortes presupuestarios (-2% en 2010 y -8% en 2011). Pero ahora, a diferencia de lo que ocurrió en los años noventa, estas reducciones del gasto afectan inevitablemente a las políticas sociales ya que apenas existe margen para ahorrar en otros capítulos “no sociales” del presupuesto público que sólo representan el 16% y hace dos décadas el 40% (Gráfico 20c).

²¹ La privatización de empresas públicas afectó a más de cien compañías, entre ellas Repsol, Endesa, Telefónica, Argentaria, Tabacalera (Altadis), Iberia, Casa, Aceralia o la Empresa Nacional de Autopistas. A corto plazo estas privatizaciones supusieron una inyección de dinero para el sector público, que facilitó el equilibrio fiscal, pero a la larga reducen la capacidad de autofinanciación del Estado, que pasa a depender casi exclusivamente de los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad social.

Entre otras medidas, queda sin efecto el Pacto de Toledo sobre Pensiones, se aplican drásticos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, se da marcha atrás a la ley de dependencia, se bajan los salarios del funcionariado, se privatizan servicios públicos, incluso aquellos que son rentables como la canalización y distribución del agua, etc. Por otra parte, se amplían los impuestos indirectos que afectan a toda la población y se llevan a cabo sucesivas reformas laborales que frenan la negociación colectiva y favorecen los despidos con baja indemnización, a la vez que se proporciona dinero público y avales del Estado para salvar a la banca²².

En definitiva, se despliega sin restricciones el *modelo social de capitalismo neoliberal* cuyos orígenes en el contexto europeo se remontan a los años ochenta con el gobierno de Margaret Thatcher y mediante sucesivas medidas legislativas que se iniciaron con el Tratado de Maastricht (1992) y se reforzaron en el Tratado de Lisboa (2009), después del fallido intento de Constitución Europea (2006). La crisis económica está siendo la ocasión para profundizar en esta estrategia, a través de tratados como el de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (Pacto Fiscal, marzo de 2012) o el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, julio de 2012). El Pacto Fiscal tiene como objetivo fortalecer las reglas para asegurar que los Estados signatarios apliquen unas políticas presupuestarias estrictas con sanciones en caso de incumplimiento que pueden alcanzar el 0,1% del PIB. El MEDE, a su vez, se encarga de dar préstamos a los países de la zona euro que no cumplan con sus obligaciones financieras, imponiendo en contrapartida estrictas condiciones macroeconómicas y recortes del gasto social, tal como ocurre en Grecia y Portugal, y puede ocurrir también en España, Italia y otros países.

Estas políticas han sido elevadas a rango constitucional en algunos países, entre ellos España, por presión directa del Banco Central Europeo y sin debate público, y responden a los mismos planteamientos que dieron lugar hace varias décadas a los planes de ajuste aplicados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en muchos países de la periferia a partir del Consenso de Washington (1989). Entre los objetivos de estos planes están la protección de la propiedad privada, la desregulación financiera y de los mercados, la disciplina presupuestaria (déficit público inferior al 3%), la eliminación de subsidios, el adelgazamiento del Estado a través de la privatización de empresas y servicios públicos, etc.²³.

Según Eric Toussaint estamos ante la mayor ofensiva contra los derechos sociales realizada desde la segunda guerra mundial a escala europea: “Los objetivos perseguidos por la dirección del BCE, por la Comisión Europea, por los gobiernos de las economías más fuertes de la UE, por las direcciones de los bancos y de las demás grandes empresas privadas, no son la vuelta rápida al crecimiento, ni la reducción de las asimetrías en el seno de la zona euro... sino 1) evitar un nuevo krach financiero y bancario que podría revelarse peor que el de septiembre de 2008; y 2) utilizar varias armas (el aumento muy importante del paro, el reembolso de la deuda pública, la búsqueda del equilibrio presupuestario, el látigo de la búsqueda de la mejora de la competitividad de los estados miembros de la UE, unos respecto de otros y en relación a los cometidos comerciales de los demás continentes) para avanzar en la mayor

²² Las medidas de salvamento con dinero público de la banca y las cajas de ahorros en los últimos años incluyen cinco vías principales: avales a emisiones de deuda de las entidades financieras, compra de activos financieros a las entidades, suscripción de participaciones preferentes convertibles (FROB), aportaciones de capital y esquemas de protección de activos. Ver PLATAFORMA POR LA NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO, *La reestructuración del sistema financiero español*. En www.nacionalizacioncajamadrid.wordpress.com.

²³ Ver INTERMON-OXFAM, *Crisis, desigualdad y pobreza. Aprendizajes desde el mundo en desarrollo ante los recortes sociales en España*, Informe N° 32, 2012.

ofensiva realizada desde la Segunda Guerra Mundial a escala europea por el Capital contra el Trabajo. Para el Capital, se trata de aumentar aún más la precarización de los trabajadores, de reducir radicalmente su capacidad de movilización y de resistencia, de reducir los salarios y diferentes subsidios sociales de forma importante a la vez que se mantienen las enormes disparidades entre los trabajadores dentro de la UE a fin de aumentar la competencia entre ellos²⁴.

En este contexto crece el malestar social que se manifiesta en el rechazo de la clase política (considerada el tercer problema del país en los sondeos mensuales del CIS, por detrás del paro y los problemas económicos) y aumentan las movilizaciones por parte de amplios sectores de la sociedad (mareas de los diversos colores, cumbre social, dos huelgas generales, diversos frentes críticos), que reclaman otros escenarios para salir de la crisis. Entre otras medidas, se plantea la necesidad de orientar los recortes hacia el gasto militar (uno de los que generan más deuda por las inversiones en armamento e I+D) e incrementar los ingresos públicos, recuperando o ampliando impuestos derogados (sociedades, grandes riquezas, sucesiones), evitando el fraude y los paraísos fiscales, e introduciendo nuevos impuestos (al turismo, ecológico), etc.

Surgen también movimientos como el 15M que plantean un cambio de paradigma en la economía y en el ejercicio de la política, y reclaman una participación directa de las poblaciones en los asuntos que les conciernen. Se denuncia a los gobiernos y a las instituciones europeas de gestionar la crisis y la deuda soberana como “herramientas de sometimiento de los pueblos a los poderes económicos y financieros, imponiendo desde arriba tratados en contra de la voluntad popular o forzando las constituciones y parlamentos nacionales”²⁵. La subordinación de la política social a las prioridades de la acumulación capitalista, centrada en su núcleo financiero, ha acelerado la desconfianza en el modelo social surgido de la transición, abriendo un debate instituyente que parecía cerrado en torno a las causas estructurales que impiden el desarrollo de una democracia real y una economía socialmente justa, en armonía con la naturaleza y solidaria en el plano internacional.

²⁴ TOUSSAINT, E., “La mayor ofensiva contra los derechos sociales realizada desde la segunda guerra mundial a escala europea”, 3ª parte de *Bancos contra pueblos: los entresijos de una partida amañada*, 2012, en www.quiendebeaquien.org

²⁵ GÓMEZ, R., “La dictadura de los tratados europeos: del Pacto Fiscal al MEDE”, en *Madrid15M*, Nº 9, diciembre, 2012.